

deslegitiman un orden político social, como es el interés del iluminismo, sino como dan sentido a la presencia humana contingente articulando la oralidad, la escritura y la imagen. Desde este horizonte resulta muy importante estudiar la cultura de América Latina, en su unidad y diferencia, pero no sólo proponiendo una semántica particular (como la antropología vitalista que soporta la utopía autóctona), sino interpretándola desde el horizonte de la convivencia en la oralidad, en la escritura y en los medios audiovisuales, y en sus eventuales contradicciones y articulaciones.

Quisiera terminar señalando que estas apreciaciones críticas quieren valorar en toda su profundidad el libro que hoy se presenta. Todos los temas que en él se desarrollan son de la mayor importancia para la sociología latinoamericana y se exponen con seriedad, originalidad y competencia. Aunque creo que no se hace justicia en el texto a algunas de mis tesis, que el autor ha tenido la amabilidad de citar o contradecir, pienso que se han considerado con la mejor intención y en un serio afán de diálogo y de progreso en la comprensión de la religiosidad y de su papel en la cultura. Aprecio y comparto la no disimulada valoración que el texto hace de las tradiciones culturales populares, pero incluso en el caso de que ellas se presenten como una contracultura, ello no debe llevar a reducir negativamente la complejidad de la cultura moderna a la dominación, la depredación y el patriarcalismo. Necesitamos una comprensión inteligente e histórica de la compleja unidad y variedad que nos constituye. Felicito sinceramente a Cristián Parker por este laborioso libro y le deseo que el diálogo con sus alumnos y discípulos le permita avanzar en el camino que ha escogido.

PEDRO MORANDÉ

«EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ROBOS Y HURTOS EN SIETE CIUDADES CHILENAS Y ANÁLISIS DE SU DISTRIBUCIÓN INTERCOMUNAL EN EL GRAN SANTIAGO»

Enrique Oviedo y Pablo Trivelli. Cuadernos CED N° 16. Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, Mayo de 1992.

Uno de los principales problemas emergentes que aflige a la población urbana del país es el de la inseguridad.

Encuestas de opinión pública efectuadas por CED-Adimark en 1993 a personas residentes en los principales centros poblados revelan que la gran mayoría considera que «ahora existe mayor violencia que hace un año» (74,4%); que en general la delincuencia es más alta «comparada con la de hace un año» (58,5%); y dos tercios temen que «en los próximos años esta situación será igual o peor».

Además comparativamente a un estudio realizado en 1991, se registra un argumento de quienes declaran estar insatisfechos con la protección policial de sus barrios, proveniente esta queja principalmente de quienes habitan en los sectores más pobres, en vez de los estratos medios como sucedía hace dos años.

¿La información empírica avala esta percepción cada vez más generalizada sobre el incremento de los delitos?. ¿Cómo se distribuye la delincuencia territorialmente en distintas ciudades del país?. ¿En qué comunas de la Capital se concentran los hurtos y robos y qué bienes son los más afectados?.

En nuestro país, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Poder Judicial registran los delitos oficialmente denunciados para sus propios propósitos institucionales. En este estudio los autores se basaron en los emanados del Departamento ANAPRO, de la Policía de Investigaciones, extrayendo una muestra del 20% del hurto y robo empírico ocurrido entre los años 1948 y 1990 en Santiago, Arica, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Temuco.

Si bien «no puede tomarse la información existente como un exacto retrato de la realidad... sino como reveladores de tendencias, orientadores de posibles posiciones y futuras acciones» (pp. 9), el estudio arriba a un conjunto de constataciones interesantes entre las que destacan:

a) En todas las ciudades estudiadas el nivel de hurtos ha tendido a disminuir, en tanto los robos por habitante han experimentado un aumento.

b) Esta tendencia es más clara en Santiago, donde la tasa de robos por habitante se duplicó en la última década. Es así como en 1946 en la capital se registraban más hurtos que robos, en 1970 ambas eran similares para llegar a una relación de 3 a 1 en 1990, mostrando una tendencia al incremento absoluto y relativo de delitos que implican el empleo de mayor fuerza en las cosas sustraídas y más violencia en las personas víctimas de los actos antisociales.

c) Santiago aparece con el mayor monto de dinero sustraído por persona denunciado por hurto y robo.

d) La distribución de estos delitos registrados en 1990 entre las comunas que conforman el Área Metropolitana confirman que estos se concentran en la de Santiago; sin embargo, los robos con fuerza en las residencias tienen lugar con más frecuencia en Las Condes (10%), seguidas por Ñuñoa, La Florida y Puente Alto (9%).

e) Los robos con violencia en las personas ocurren en un 89% de los casos en la vía pública y en cuanto a los que afectan a las residencias, un 95% corresponden a casa y sólo un 5% a departamentos.

Como toda investigación, ésta ilumina aspectos de un fenómeno complejo e incita a plantear nuevas preguntas que constituyen derroteros para futuros estudios sistemáticos sobre el tema.

En efecto, los resultados permiten concluir que la opinión generalizada sobre la inseguridad del habitante santiaguino tiene asidero en la realidad. Aquí ocurren los hechos antisociales cada vez más violentos y espectaculares, comprobándose que el objeto más frecuente afectado es la vivienda — en un 76% de los casos se trata de robos con fuerza—, superando a las instituciones y a los vehículos. Este fenómeno agudiza la sensación de inseguridad para constituir un ámbito que se considera debería ser el más protegido; al ser «el habitat más íntimo de las familias» (pp. 27). Este hallazgo es concordante con otros derivados de estudios realizados en terreno, en diversos conjuntos habitacionales de la capital, que han mostrado que el valor del espacio público residencial peor concretado es la seguridad en calles y pasajes, demandándose al gobierno central y local la urgente implementación de medidas que satisfagan la necesidad de la gente por vivir y convivir en espacios que está a salvo de riesgos para su integridad física y sus bienes.

Desde la perspectiva de la temática de la seguridad ciudadana el estudio de la distribución intercomunal de los delitos en Santiago tiene especial relevancia a fin de descentralizar las políticas en esta materia hacia los Municipios y, en especial, hacia las comunidades locales que habitan en barrios donde las familias, en su vida cotidiana, experimentan condiciones de inseguridad. Por ello el enfoque que emplea este trabajo no sólo es un importante aporte para la gobernabilidad de la metrópoli, sino también contribuye a que las entidades edilicias tengan éxito en el ejercicio de sus atribuciones en asuntos de seguridad pública, pues a ellas les corres-

ponde potenciar y canalizar las iniciativas de las organizaciones territoriales tendientes a superar el problema.

En la dirección a que apunta este estudio surgen preguntas que pueden elucidarse mediante estudios de terreno que empleen técnicas de carácter cualitativo. Así por ejemplo, cabe plantearse si las nociones de seguridad pública son coincidentes entre las autoridades de gobierno y las comunidades locales; si existe la misma efectividad entre las medidas adoptadas por el gobierno central y local respecto de las emanadas de la comunidad organizada; cómo se articulan las iniciativas surgidas «desde la comunidad» con las instancias político-administrativas de nivel comunal, regional y nacional; de qué manera influye la localización y conformación espacial de los barrios, la identificación territorial y estrato social de sus residentes, la historia del poblamiento en la participación en proyectos de seguridad; si es necesario diseñar nuevas instancias y canales de participación para impulsar iniciativas de gestión de proyectos de esta índole, de modo que sea la comunidad misma quien asuma responsablemente este problema.

En tal sentido parece más significativo emprender en el futuro investigaciones sistemáticas orientadas a conocer la capacidad y obstáculos que tienen los grupos sociales víctimas de la acción delictual para actuar organizadamente frente al problema, en particular de aquellos que residen en sectores populares que no están en condiciones de «comprar seguridad», que buscar la caracterización más precisa de las personas que cometen los actos antisociales.

PATRICIO DE LA PUENTE LAFOY